

# LA IDEOLOGÍA POLÍTICA DE UN MUNICIPIO DE OPOSICIÓN. EL PAN EN CIUDAD JUÁREZ (1983-1985)<sup>1</sup>

Tonatiuh Guillén López\*

## RESUMEN

En este artículo se analizan los principales contenidos de la ideología política de un gobierno municipal de oposición expresados en la relación que estableció la institución municipal con las organizaciones populares independientes. El caso estudiado corresponde a la primera etapa del neopanismo, cuando asumió sus formas más radicales la insurgencia política empresarial que caracterizó a los años posteriores a la nacionalización de la banca en 1982. La administración de Francisco Barrio en Ciudad Juárez, el más representativo de los gobiernos panistas de la década de los ochenta, permite analizar las formas concretas del radicalismo ideológico del neopanismo, que si bien coincidieron con la demanda social de democracia, también adquirieron fuertes rasgos de intolerancia desde el poder público.

## ABSTRACT

This article examines a principal elements in the political ideology of an opposition municipal government, as they were expressed in the relationship which a specific municipal government established with independent popular organizations. The case under study is the first two years of the *neopanista* government in Ciudad Juárez. During this period, immediately following the 1982 nationalization of Mexico's banks, political insurgency on the part of the business community reached its most radical form. The administration of Francisco Barrio as municipal president of Ciudad Juárez was the most representative of the PAN governments of the 1980s. It offers an ideal case for analyzing the determinative expressions of ideological radicalism in *neopanismo*. While these expressions no doubt responded to social demands for democracy, they also incorporated pronounced features of intolerance of public power.

• **Tonatiuh Guillén López.** Director de la revista *Frontera Norte* y del Departamento de Estudios de Administración Pública. Se le puede enviar correspondencia a Blvd. Abelardo L. Rodríguez 21, Zona del Río, Tijuana, B.C. Tels. 300411, 300412, 300413 y 300418.

1 Agradezco a Silvia Gómez Tagle y a Arturo Alvarado sus comentarios a este ensayo.

### *Introducción*

Una de las características más recientes del sistema político mexicano ha sido el acceso de los partidos de oposición a los gobiernos municipales. Como un rasgo que destacó durante la década ochenta, sin ser generalizado, progresivamente los municipios se convirtieron en escenario de intensos enfrentamientos electorales, revelando así su carácter de espacio gubernamental primario al que tienen acceso -o debieran tenerlo- los ciudadanos y los partidos políticos. A pesar de sus limitaciones e independientemente de su número y localización, los ayuntamientos en manos de los partidos de oposición representan una experiencia política y administrativa novedosa, tanto para su entorno local como para el perfil contemporáneo del sistema político. El nuevo rostro que así adquieren los municipios constituye un área de investigación no explorada suficientemente, en la que se inscribe el presente artículo.

En tanto que experiencias de gobierno enmarcadas por el problema de la apertura democrática, el estudio de los cambios en la política municipal ha sido enfocado particularmente al análisis del proceso electoral, pasando a segundo término la investigación de la experiencia de gobierno a la que dieron existencia. De esta forma, al tener por eje la cuestión de la apertura del sistema político -que indudablemente sigue siendo el problema de mayor relevancia nacional-, tiende a quedar fuera de perspectiva el estudio de los gobiernos municipales de la oposición, su micropolítica en acción, en la que también se encuentra implicado su ejercicio de la democracia.

Los gobiernos municipales son instituciones públicas con una amplia capacidad para determinar una política interna propia y monopartidista, debido a la particular estructura jurídica de los ayuntamientos. En sus condiciones actuales, los ayuntamientos tienden a excluir la pluralidad política al reducir la presencia de contrapesos en su organización administrativa, por lo menos en la medida que han sido establecidos en los otros niveles de gobierno. Al ser los ayuntamientos elegidos en planilla, incluyendo en ella al presidente municipal y a la gran mayoría de los regidores (siendo por completo insuficiente la modalidad de regidor de representación proporcional), el gobierno municipal queda concentrado casi por completo en el partido triunfador.<sup>2</sup>

Considerando esta particularidad, los partidos de oposición que han gobernado algún ayuntamiento con relativa libertad pueden reflejar en su

2 Este esquema todavía corresponde a un sistema de gobierno que permite, con limitaciones, la pluralidad en las elecciones, pero que se cierra a ella en su ejercicio. Corresponde también a una concepción de la política sujeta al juego de "todo o nada", "eco de ese pasado terrible", como la definió Octavio Paz (*La Jornada*, 12 de agosto, 1988, págs. I y 12). Pero sobre todo indica que las reformas del sistema político han dejado de lado a los gobiernos municipales, que en este aspecto se encuentran muy rezagados en relación con los cambios en el poder legislativo federal e inclusive estatal, lo cual es más notable en los municipios urbanos de gran tamaño.

práctica su concepción de la política, de la administración pública y, en general, de su relación con la sociedad, a pesar de las inevitables restricciones que pueda implicar su cercanía con los gobiernos estatal y federal, en manos de sus contrarios políticos. A diferencia de lo que ocurre cuando la oposición ha alcanzado posiciones en instituciones como los congresos estatales o federal, en donde la capacidad de decisión sigue dependiendo en última instancia de la misma burocracia que ha gobernado el país, en los ayuntamientos ganados por la oposición las decisiones quedan centralizadas en ésta. En los municipios, los partidos de oposición disponen de un espacio de intervención distinto al conocido en las otras instancias de gobierno, cuyo aspecto central es la capacidad ejecutiva.<sup>3</sup>

En la experiencia de gobierno de los municipios conquistados por los partidos de oposición pueden encontrarse rasgos importantes de una práctica político-administrativa que nominalmente debiera ser diferente a la realizada por la burocracia política. Sobre todo, entendiendo que son parte de un proceso de democratización, se esperaría de ellos una relación más abierta y plural con la sociedad local y sus particulares grupos. La democracia, sin embargo, como parece ser la lección de lo que expondremos, no es solamente alternancia en el gobierno, como justamente ahora se reclama al sistema político. El caso que analizamos en este ensayo, enfocado al estudio de la ideología política de una experiencia de gobierno municipal, corresponde al que posiblemente llamó más la atención nacional en la pasada década: la administración del PAN en Ciudad Juárez, entre 1983 y 1986, presidida por Francisco Barrio Terrazas.

### *I. El Caso Chihuahua y la Democracia*

Durante los últimos siete años, después de los espectaculares resultados obtenidos por el PAN en las elecciones de 1985 en el estado de Chihuahua, el proceso político de esa entidad se convirtió en parte de la discusión nacional por la democracia y de su contraparte más extrema: el fraude electoral. De esta manera, el llamado “caso Chihuahua” surgió ante la opinión pública como un prototipo de lo que debería ser la lucha por la democratización del sistema político y, al mismo tiempo, de la capacidad gubernamental para controlar la expresión electoral ciudadana. Así, Chihuahua y el fraude electoral, Chihuahua y la democracia, se convirtieron en términos asociados formando parte de la discusión de la política mexicana en la década pasada. Ciertamente, las elecciones presidenciales de 1988 y las locales de Baja California en 1989, así como las propias en Chihuahua, han opacado el perfil de los acontecimientos de 1983 y 1986,

3 Si bien restringida a las atribuciones permitidas a los municipios por las constituciones estatales y la general del país. Aun considerando las reformas introducidas en 1983 al artículo 115 constitucional, siguen siendo reducidos los ámbitos de intervención del municipio en la dirección del desarrollo económico y social, debido sobre todo a la carencia de autonomía financiera.

que a pesar de todo continúan siendo antecedentes directos del avance y contradicciones del panismo de los noventa y de las presiones ciudadanas por la apertura política.

Durante la primera mitad de los años ochenta, el PAN encamó dos atributos sobresalientes de la política chihuahuense: por un lado, logró movilizar a gran parte del electorado en las principales ciudades del estado, especialmente en Ciudad Juárez, en donde se escenificaron las mayores batallas contra el partido oficial. Por otra parte, el PAN fue el partido al que se dirigió toda la fuerza del aparato gubernamental, particularmente durante las elecciones de 1986. De la misma manera que ocurrió con el proceso político estatal, el PAN chihuahuense fue estrechamente asociado con la lucha por la democracia y como la prueba tangible de los límites que enfrentan los partidos de oposición: simplemente, no han dejado de ser oposición, sobre todo en el nivel ejecutivo de los gobiernos estatal y federal o en espacios que impliquen amplia capacidad de decisión, como en las legislaturas.<sup>4</sup>

Fuera del anterior contexto que ya ha sido ampliamente difundido, existe una parte del “caso Chihuahua” al que no se ha dedicado suficiente atención. A pesar de las enormes dificultades que debió superar, entre 1983 y 1986 el PAN ejerció un periodo de gobierno en los principales municipios de la entidad, en esos microespacios de la política en los que tuvo una posición dominante. Con los ayuntamientos dirigidos por el PAN, la política interna a esos municipios mostró los rasgos de un poder distinto al ejercido por el partido oficial. Entre las variadas perspectivas en que es posible estudiar esa experiencia, en este artículo nos proponemos caracterizar el perfil ideológico político de la dirección del ayuntamiento panista, revisando el caso de Ciudad Juárez. La definición de ese perfil -orientado por el significado democrático de esa administración— se hará a través de una reconstrucción de la relación que estableció el ayuntamiento con las organizaciones populares independientes.

La representatividad del panismo juareense en relación con el PAN considerado nacionalmente es una cuestión que no discutiremos en esta ocasión; valga señalar que no se trata de una organización política homogénea. Queda fuera de dudas, sin embargo, que el panismo juareense fue el más numeroso, consecuente y de mayor influencia en el estado, lo que se reflejó en la candidatura de Francisco Barrio en las elecciones para gobernador en 1986. Al mismo tiempo, el panismo juareense de esos años

4 Las elecciones de Baja California en 1989, con el primer gobernador de oposición, pudieran ser consideradas el nuevo límite alcanzado por estos partidos. Sin embargo, considerando el caso en conjunto con las elecciones simultáneas a otras entidades, particularmente en Michoacán y, además, la limitada reforma electoral de 1990, parece más una excepción que un nuevo nivel de tolerancia.

corresponde con plenitud a la corriente empresarial que se insertó en sus filas, generando la tendencia “neopanista” que ahora dispone de gran influencia en la dirección nacional del partido.<sup>5</sup> Pudiera considerarse, en este último sentido, que la experiencia del PAN juarense es un ejemplo práctico de un gobierno de la corriente neopanista, en el que pueden apreciarse elementos importantes de su estructura ideológica.

En relación al neopanismo, el caso de Ciudad Juárez puede ser considerado representativo de sus tendencias ideológicas más radicales y en algún momento dominantes, pero no de su factibilidad histórica para todo espacio y tiempo. Al respecto habría que añadir algunas precisiones adicionales al término de “neopanismo”, en el que por lo menos parecen definirse dos corrientes, diferenciadas por su radicalidad ideológica. La primera, correspondiente a su primer momento, inmediato a la nacionalización de la banca en 1982, que se planteaba un enfrentamiento abierto frente al sistema político, especialmente contra la figura presidencial. La segunda corriente, derivada de la legitimidad y espacios que la primera abrió para la participación electoral de los empresarios, se caracteriza por un perfil de oposición tolerante, capaz de aceptar la coexistencia pacífica en, con y contra el sistema político, mediante un desarrollado sentido práctico. En esta segunda corriente pudiera ubicarse al actual gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, cuyo perfil político no hubiera trascendido en 1983, de la misma manera que ahora resultaría impropio el neopanismo radical de aquel año.

Por otro lado, puesto que la ideología de la dirigencia del PAN no equivale a la ideología de la población que le sigue, nuestro análisis se refiere exclusivamente a la primera, una vez instalada en la administración municipal. Si bien el gobierno de Francisco Barrio hizo grandes esfuerzos por proyectar su concepción política hacia la población juarense, no encontró una masa informe, por lo que ambos no pueden identificarse. Sin embargo, entre la población y el grupo político dirigido por Barrio efectivamente surgieron amplios espacios de coincidencia. Primero los unió el PRI, su gobierno y aquello que representaban como explicación de su vida cotidiana: la crisis y la corrupción, principalmente. Posteriormente, y como revisaremos adelante, la relación comenzó a definirse por términos positivos -sin desprenderse de su referencia con el PRI-, en la medida en que la imagen de Barrio comenzó a encarnar las virtudes que nunca tuvo la burocracia política. Justamente, durante el proceso que consolidó afinidades entre Barrio y la población (que equivale a su conversión en

5 La dirigencia del PAN en Ciudad Juárez y en otros municipios del estado, a excepción de la capital, fueron asumidas por representantes de la oleada de empresarios que se sintieron convocados a la lucha electoral de oposición ante la nacionalización bancaria y los efectos inmediatos -más ideológicos que reales- de la crisis económica en la reproducción de sus capitales. Un análisis al respecto se encuentra en Abraham Nuncio, *El PAN. Alternativa de poder o instrumento de la oligarquía empresarial*. México, Nueva Imagen, 1986.

caudillo político) pueden encontrarse rasgos decisivos de su perfil ideológico y los de su gestión en el ayuntamiento.

Adicionalmente, debe aclararse que existe una clara distinción entre la ideología de la dirigencia del PAN cuando convocó a la población a votar y la ideología que expresó esta dirigencia una vez en el gobierno municipal. No pretendemos analizar la primera, sino destacar los elementos centrales de la segunda, que no tiene las características de un discurso de convocatoria electoral, como podrá apreciarse. En la primera dominaba la crítica del PRI y del gobierno; en la segunda, la crítica de las organizaciones populares independientes. Una precisión final: la corriente neopanista en Ciudad Juárez prácticamente tomó por asalto al partido, en un proceso que no estuvo libre de enfrentamientos con los viejos cuadros del PAN que no siempre coincidieron con sus planteamientos. Para efectos de esta exposición asumimos el resultado, que fue el desplazamiento prácticamente total de esa oposición interna.

Para nuestro análisis del municipio panista realizamos una reconstrucción de su relación con el movimiento popular independiente, que en ese tiempo estuvo representado por las organizaciones de colonias marginales, los estudiantes universitarios y los maestros de primaria, principalmente. En su relación con estos tres sectores, la administración del PAN definió en la práctica conceptos básicos de su ideología política, sobresaliendo sus ideas sobre el orden (ante todo), el respeto a la legalidad y a las instituciones -incluyendo a la propiedad privada- e, implícitamente, su concepción de la democracia. No fueron los únicos de su mapa ideológico, pero sí los más recurridos en los primeros dos años de su administración.

Simplemente para destacar la importancia del último concepto, consideremos lo siguiente: si comparamos la experiencia del PAN como administrador municipal y, posteriormente, como movimiento social que especialmente en 1986 enfrentara el poderío del gobierno federal, puede apreciarse en la dirigencia panista una concepción restringida de la democracia y una implícita desigualdad social. Para decirlo en términos breves, todo aquello que impidió a las organizaciones populares entre 1983 y 1985 —incluso mediante la violencia-, fue considerado legítimo cuando ellos lo hicieron en 1986. De esta manera, el bloqueo de calles fue calificado de “anárquico” -en el tono más despectivo- cuando lo hicieron maestros, colonos o estudiantes; por el contrario, cuando lo realizó el PAN fue “desobediencia civil”. Comparando ambas circunstancias, puede apreciarse que en la concepción panista la legitimidad o no de los actos de protesta dependía de los actores, no de las acciones. En este sentido es que indicamos la extrema restricción de su concepto de democracia: no hay igualdad entre los sectores sociales y sus organizaciones. O bien el PAN todavía debe una disculpa a aquellos que reprimió durante su gobierno municipal.

Contenidos en la democracia se encuentran el derecho de los diferentes sectores sociales a participar en los asuntos de gobierno; el derecho de petición; el derecho de protesta; el derecho, como *a posteriori* adujo el panismo chihuahuense, a la “desobediencia civil”. Sin embargo, estos rasgos del concepto -dentro de un ambiente social represivo que excedía los límites del PAN e incorporaba a otros actores, empresarios principalmente- fueron negados al movimiento popular independiente, específicamente al Comité de Defensa Popular (CDP), a los maestros federales agrupados en la Coordinadora de Fuerzas Democráticas del Magisterio (CFDM) y a los estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar (ESAHE). La relación de la administración panista con estos movimientos muestra los rasgos extremos de su ideología política y, de manera clara, el espacio en ella de los movimientos populares independientes. Un espacio diferenciado, intolerante, represivo y, finalmente, no democrático.

Desde que apareció el libro de Enrique Krauze, *Por una democracia sin adjetivos*, fue objeto de fuertes polémicas alrededor de los adjetivos del concepto de democracia. Desde su posición autodenominada “sin adjetivos”, la discusión de su propuesta llegó hasta la abierta y necesaria adjetivación del concepto. Precisamente, entre los elementos empíricos en que se basaron algunos de los ensayos de esta obra fue la experiencia chihuahuense, en donde la demanda democrática había reunido a las más variadas corrientes. En Chihuahua, la democracia como demanda universal efectivamente pareció perder sus adjetivos. Sin embargo, como trataremos de demostrar a lo largo de este trabajo, la democracia, sus formas y límites, se encuentran determinados por sus portadores. Su concepción y su práctica inevitablemente llevan el sello de los intereses sectoriales y, más claro, de la clase social que la piensa y la practica. El PAN chihuahuense y, particularmente, la organización panista en Ciudad Juárez, también imprimió a la democracia el suyo.

### *//. La Crisis Económica, Contexto del Ascenso de las Movilizaciones Populares*

Según la interpretación panista, el movimiento que lo condujo al gobierno municipal tenía una raíz netamente popular, argumentando con la extensa participación de la población que los apoyó. Sin embargo, si bien el PAN obtuvo un amplio respaldo de la población,<sup>6</sup> la dirección del movimiento no tenía dependencia de las organizaciones e intereses populares. En función de esa dirección es que puede resaltarse la demarcación de los intereses de clase entre ésta y los amplios sectores agrupados en el

6 Un análisis cuantitativo sobre la distribución de las preferencias políticas entre la población juarense en 1986 puede encontrarse en el ensayo del autor “Political Parties and Political Attitudes in Chihuahua”, en Arturo Alvarado (ed.), *Electoral Patterns and Perspectives in Mexico*. La Jolla, CA., Center for US-Mexican Studies, USCD, 1987.

movimiento. La demostración más fehaciente de esa diferenciación fue precisamente la relación que el PAN estableció con las organizaciones populares independientes en el ayuntamiento. En otros términos, el PAN mantuvo una relación con lo popular en la medida en que aparecía subordinado a su dirección.<sup>7</sup> Lo independiente se cuestionaba; se le negaba derecho a existir.

Durante el periodo de la administración panista, el rasgo característico de los movimientos de los estudiantes, colonos y maestros fue su no dependencia orgánica de instituciones gubernamentales o de partidos políticos, al contrario de lo que ocurría con otras asociaciones populares conectadas al PRI o al mismo PAN, que también se preocupó por generarlas. Considerando sus demandas, puede apreciarse que se trataba de movimientos estrechamente estimulados por las repercusiones sociales de la crisis económica, si bien no generados mecánicamente por ella. En principio, no confrontaban directamente a la administración municipal, salvo en el caso del CDP. A pesar de ello, sus formas de protesta fueron argumento suficiente para convertirlos en el enemigo principal del ayuntamiento panista durante sus primeros dos años. Describiremos brevemente las características de estos representantes del movimiento popular independiente.

### **a) El movimiento urbano popular**

El desarrollo urbano de Ciudad Juárez, a pesar de su acelerado crecimiento promovido por la inversión pública federal, ha sido insuficiente para satisfacer las demandas de su expansión demográfica.<sup>8</sup> El problema de la vivienda y del acceso a los servicios públicos elementales se ha convertido en eje de las principales demandas populares. En este contexto, las organizaciones urbanas, independientes o vinculadas a partidos políticos, son parte fundamental y cotidiana en las relaciones de los gobiernos locales

7 La administración panista y particularmente algunos de sus miembros, como Sergio Conde, secretario del Ayuntamiento, Américo Lastra, director de Gobierno y el propio Francisco Barrio, se preocuparon en gran medida por establecer una relación estrecha con los sectores populares de Ciudad Juárez: las colonias marginadas y con sus jóvenes (los "cholos"). Hacia los primeros se dirigió el programa de Comités de Vecinos -que también se extendió a otras zonas de la ciudad- y hacia los segundos un programa específico, Barrios Unidos con Barrio, destinado a reeducarlos y a conducirlos nuevamente a la vida social "normal" —asumiendo que se trataba de un problema de conducta desviada. En ambos casos fue notable que expresado en los proyectos se encontrara el establecimiento de una dirección externa, una tutela, que a fin de cuentas cerró la posibilidad de un rumbo propio a las organizaciones. Con esta relación de dependencia, las redes creadas por el ayuntamiento generaron rasgos similares al corporativismo priísta.

8 Entre 1970 y 1988 la población de Ciudad Juárez pasó de 424 135 a 887 542 habitantes. Fuentes: *IX Censo General de Población y Vivienda* y Encuesta Socioeconómica Anual de la Frontera, COLEF, 1987.

con la población. Entre ellas destacan la Alianza de Colonias Populares (ACP), dependiente de la Liga Municipal de Organizaciones Populares (LMOP) del PRI, y el Comité de Defensa Popular, organización que durante mucho tiempo estuvo aislada de los partidos políticos.<sup>9</sup>

Los antecedentes del CDP se remontan a principios de la década setenta, formando parte destacada en la historia de los movimientos sociales en el estado de Chihuahua.<sup>10</sup> Cuando ocurrió el ascenso del panismo, el CDP ya era parte de la política regional y constituía un importante grupo de presión para la administración municipal. Entre sus mecanismos de lucha destacaba la invasión de terrenos, en donde se establecía una colonia o “frente”, así como las marchas semanales a oficinas públicas para demandar la dotación de servicios. Con esta estrategia, además de la radicalidad de su discurso, el CDP llegó a convertirse en el enemigo número uno del sector empresarial y, en menor proporción, de la burocracia política regional, a la que no había causado grandes problemas debido a su posición abstencionista en los periodos electorales. Las actividades de la organización y las respuestas que recibió de parte de las “fuerzas vivas” de la localidad, provocaron que hacia 1983 el CDP y la “anarquía” o el “comunismo” -como adjetivos despectivos- fueran términos equivalentes entre la burguesía de Ciudad Juárez y en importantes sectores medios de la población.

### **b) El movimiento magisterial**

Si bien el movimiento de los maestros no tenía en el estado los antecedentes del CDP, en Ciudad Juárez la Coordinadora de Fuerzas Democráticas del Magisterio fue la organización que movilizó la lucha de los maestros federales por obtener incrementos salariales y por lograr la

9 En las elecciones federales de 1985, el CDP por primera vez participó electoralmente bajo las siglas del PRT. Actualmente se ha consolidado como partido político con registro estatal.

10 El 28 de enero de 1972 se fundó el CDP, centro coordinador y aglutinador del movimiento de masas e integrado por las organizaciones siguientes: Colonia Francisco Villa, Movimiento Sindical Ferrocarrilero de la Sección 5 del STFRM, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UACH, Sindicato Aceros de Chihuahua, Sección 25 del SUTERM (electricistas), Frente Auténtico del Trabajo, Movimiento Revolucionario del Magisterio, Consejo Estudiantil de Lucha (con representantes de todas las escuelas de la UACH). Este CDP como centro coordinador de luchas obreras y populares se mantendría vigente hasta 1974 [...] De 1972 a 1974, el CDP como coalición de organizaciones, aglutinó prácticamente todas las manifestaciones de lucha, e incluso después de 1974, ya como organización específica y desligada de los electricistas, maestros y estudiantes, el CDP continuó abanderando diversas expresiones de combate, hasta que finalmente después de mayo de 1977 sufrió el desprendimiento del sector ferrocarrilero, quedándose como una organización gestora de colonos, de problemas urbanos y campesinos [...] En agosto de 1974 comenzaba el periodo del CDP como un grupo político con línea y orientación propia, que en los próximos años concentrará a su alrededor las expresiones de luchas diversas. Rubén Lau, *Diario de Juárez*, 16 de septiembre de 1984. A partir de esta nota, las referencias hemerográficas con las siglas IP, significa que fueron retomadas de la revista chihuahuense *Información procesada*; el resto proceden del Sistema de Información Fronteriza de El COLEF.

democratización de su sindicato. La crisis económica había afectado duramente el salario de la burocracia nacional, lo que fue particularmente sensible en las zonas fronterizas, en donde la devaluación de la moneda provoca un proceso inflacionario instantáneo. Adicionalmente, en esos momentos (1983) el principal problema que agitaba el conflicto fue el cese de algunos profesores que habían participado en las demandas y actividades de la Coordinadora.

Considerando la prioridad de su demanda salarial, puede comprenderse al movimiento magisterial como un producto inmediato de la crisis económica, sin llegar a establecer una relación de dependencia directa con las condiciones políticas locales. En este sentido, las protestas del magisterio se insertan dentro del mismo tipo de respuesta social que provocó, en el terreno político, el ascenso electoral del PAN. Sin embargo, al poco tiempo se convirtieron en enemigos irreconciliables debido a que los métodos de presión utilizados por los maestros, después de las respuestas negativas obtenidas en los procedimientos ordinarios de petición, empezaron a coincidir con las actividades “anárquicas” del CDP: marchas por la ciudad, los mítines, las “pintas”.

### **c) El movimiento estudiantil**

En el primer año de la administración panista, el movimiento estudiantil estuvo representado por los acontecimientos ocurridos en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar.<sup>11</sup> Consistía en una movilización estudiantil derivada de problemas internos a la administración del plantel, de antecedentes previos a 1983, pero que habían sido agravados por la crisis. Para resolver la situación financiera y académica de la escuela, entre los objetivos del movimiento se encontraban la obtención de subsidio federal y, a la vez, terminar con su carácter privado mediante el reconocimiento de su autonomía como institución de educación superior. Al igual que en el caso del magisterio, sus demandas no enfrentaban directamente al gobierno municipal, realizando los estudiantes sus gestiones ante la administración federal y estatal. Sin embargo, sus gestiones ordinarias enfrentaron primero a la dirección de la escuela y, después, a las secretarías de estado involucradas (SEP y SARI I), que no estaban dispuestas a ampliar su presupuesto. Las estrategias estudiantiles cambiaron entonces hacia otro tipo de presiones.

El ayuntamiento de Francisco Barrio heredó los anteriores movimientos, a los que trató dominado por una lógica de orden social que debía ser impuesto incluso mediante la violencia institucional cuando fuera

11 También fueron de importancia las movilizaciones sucedidas en la Escuela de Administración Pública y Ciencias Políticas, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que recibieron de la administración panista un trato semejante a los estudiantes de la ESAHE. Por ser más importante el caso de los segundos, por su duración y polaridad de las posiciones asumidas restringiremos a ellos nuestra exposición.

necesario. Con esa actitud, el gobierno panista unificaba a los movimientos en un doble sentido: los reprimía igual; los acercaba entre sí. En la lógica de Barrio, la defensa de la legalidad se convirtió en el imperativo mantenimiento de las formas de expresión dentro de los procedimientos formales, que en esencia son ajenos a las tradiciones de los movimientos populares, no tanto por desconocimiento sino por su ineficacia. Entre las reglas operativas de la política nacional -practicadas desde el partido oficial- se encuentra incluido el juego de las “presiones” (hasta cieno punto) que se mueve entre los límites difusos de la legalidad establecida. Por el contrario, rompiendo con esas reglas y pretendiendo asumir e imponer como gobierno nuevas normas políticas, un ordenamiento social distinto, la solicitud formal y el seguimiento de los canales institucionales fueron las únicas expresiones toleradas por el ayuntamiento panista, descalificando por principio actividades de presión como las marchas, los mítines, las pintas, los bloqueos, etc. En otros términos, se exigieron las formas ideales de la democracia liberal, impuestas en condiciones de no democracia liberal. Para los movimientos, la actitud del ayuntamiento se traducía en su virtual rendición una vez agotados los procedimientos formales. Paradójicamente, los términos que Barrio exigió al movimiento popular independiente fueron los mismos que rompió en 1986, cuando justificó las acciones de “desobediencia civil”.

### ***III. La Ideología Política de la Administración Panista y su Práctica***

La actitud del ayuntamiento panista no significó un cambio cualitativo en la *relación política del* movimiento popular con los gobiernos municipales previos y, mucho menos, con el sector empresarial, quien se había convertido en su principal detractor. En este aspecto, lo que cambió fue el tono más extremo de la relación. El cambio sustantivo surgió con el nuevo discurso sobre la legitimidad de la acción pública y sobre la relación entre las instituciones de gobierno y la sociedad. El gobierno municipal se concebía a sí mismo no solamente como una administración nueva, producto de una expresión social democrática, sino especialmente como portador de un proyecto político de largo plazo destinado a cambiar el perfil del país: un nuevo orden social. De la misma manera que dentro de éste no cabía la corrupción o el manejo ineficiente de los recursos públicos, tampoco cabían las expresiones políticas del periodo anterior. Sin proponérselo, el movimiento popular independiente fue ubicado así en una posición de mayor antagonismo con la administración municipal.

#### **a) El cuadro previo a la administración municipal del PAN**

Durante la administración del PRI que terminó en octubre de 1983, la crisis económica tuvo tiempo suficiente para marcar su huella en los ingresos de la población y en los presupuestos gubernamentales. Las organizaciones

independientes reaccionaron entonces con mayores movilizaciones al agudizarse sus necesidades materiales. Durante los primeros meses de 1983 era común observar manifestaciones de esas organizaciones en las calles de Ciudad Juárez, llegando a convertirse en un problema, más simbólico que real, para los principales grupos de presión en la ciudad. Las cámaras empresariales fueron el principal sector que demandó al municipio y al gobierno del estado —e incluso al ejército—, que terminaran con ese cuadro de “caos social”.<sup>12</sup> Hacia 1983, la ideología del orden se había convertido en la discusión dominante entre la elite económica, que a su vez tenía la capacidad de transmitirla al gobierno municipal y a los medios de comunicación, presentándola como una demanda de la sociedad juarense.

El conflicto no radicaba en las demandas de los movimientos, sino en las *formas*, los mecanismos de presión instrumentados ante el agotamiento de los canales institucionales; con excepción del movimiento urbano del CDP. Durante años, el CDP había convertido la invasión de terrenos en el medio principal para la satisfacción de sus demandas urbanas, dejando muy atrás el seguimiento de procedimientos legales. Adicionalmente, a través de marchas, mítines, pintas o bloqueos de calles, la organización presionaba a los gobiernos municipal y estatal para obtener servicios públicos y la regularización de la tenencia de la tierra. Si bien no excluyó los instrumentos formales del derecho de petición —a posteriori—, el procedimiento de presión directa se convirtió en la estrategia principal del CDP.

Durante mucho tiempo, las anteriores formas de la política urbana no fueron conflictivas con la política gubernamental. A través del partido oficial, la burocracia local también realizaba o estimulaba acciones equivalentes que servían para fortalecer los lazos corporativos y de dependencia de las organizaciones populares, como era el caso de la Alianza de Colonias Populares. En este contexto, el CDP se distanciaba políticamente de la ACP, pero no de las formas de lucha para obtener sus reivindicaciones. Mientras la ACP se mantenía dentro de las reglas del juego, nominalmente generando apoyo en vez de oposición, evadía la imagen subversiva que pudiera atribuírsele. Por el contrario, para el sector empresarial lo que resultaba intolerante era el discurso explícitamente socialista del CDP, al que veía como la amenaza principal. En gran medida, la abierta radicalización del sector empresarial había surgido en respuesta a la creciente importancia del CDP en la localidad y en el estado.

Las cúpulas de las organizaciones empresariales en Ciudad Juárez, especialmente el Centro Empresarial (COPARMEX), CANACO y CA-

12 “En tanto que el presidente de la CANACINTRA dijo ayer que de ser necesario se solicitaría al presidente municipal que pidiera la intervención del ejército para poner orden en la ciudad, el presidente de la CANACO señaló que ese organismo no hará ninguna petición por ahora, y se concretará a estar a la expectativa de que las autoridades ejerzan el principio de autoridad”. *El Universal de Ciudad Juárez*, 15 de mayo de 1983, IP.

NACINTRA, así como los líderes de las organizaciones sindicales y campesinas del partido oficial, a fines de 1981 formaron una asociación de nombre notablemente sintomático: Coalición para el Orden y el Desarrollo Integral de la Comunidad (CODIC). Durante los primeros años ochenta, esa asociación se convirtió en el principal grupo de presión y a la vez legitimador de los actos de la administración municipal, particularmente de aquellos correctivos del “desorden”. La supuesta amplia representación de intereses que participaron en la CODIC daba mayor peso a sus propuestas, que en realidad reflejaban los intereses del sector empresarial.

La CODIC y sus miembros, en grupo o individualmente, entre 1981 y 1984 fueron quienes de manera más radical enfrentaron verbalmente las movilizaciones de colonos, estudiantes y maestros, calificándolas de “anárquicas”. En el cuadro previo a la administración del municipio por el PAN, los polos ideológicos estaban representados por los actores anteriores. Antes de 1983, ni siquiera la presidencia municipal o el gobierno estatal llegaron a los extremos de la CODIC y de las cámaras empresariales, quienes en reiteradas ocasiones demandaron la represión violenta de los movimientos populares.

Es necesario añadir a este panorama las repercusiones ideológicas de la nacionalización bancaria entre la burguesía local. Para la CODIC y para la mayoría de sus miembros, el final del sexenio de López Portillo constituyó un atentado brutal a la propiedad privada, que equivalió al virtual ingreso de México al socialismo. El fantasma del socialismo extremó las posiciones políticas del CODIC y de las agrupaciones empresariales, de por sí radicales y enfrentadas previamente con el “comunismo” local. De esta manera, todas aquellas organizaciones que representaran o parecieran tendencias socialistas fueron censuradas aún más. En este juego de posiciones extremas, la CODIC reafirmó sus objetivos antagónicos: el CDP, los maestros participantes en la CFDM y los estudiantes de la ESAHE. Poco tiempo después, la mayoría de ellos incluyó en su lista al PRI.

En el anterior contexto pueden ubicarse actitudes concretas de los empresarios relacionadas con los movimientos populares. En el caso de los estudiantes, que contaban entre sus acciones el secuestro de autobuses, el presidente de la CANACO, Artemio Jayme Salazar, en nombre de la CODIC advirtió que “si el gobierno no frena tanta anarquía e impone el principio de autoridad, llegaremos nosotros a las últimas consecuencias”.<sup>13</sup> Este mismo personaje posteriormente solicitó la intervención del ejército ante la tibieza de las autoridades municipales para controlar el problema de los estudiantes, quienes habían ocupado las oficinas de la SARH como medida de presión para obtener subsidio federal.<sup>14</sup> Otro distinguido representante

13 *El Fronterizo*, 19 de marzo de 1983, IP.

14 “Si para meter en orden a estos grupos anárquicos se requiere la intervención del ejército pedirá al presidente municipal que recurra a la Guarnición de la Plaza a fin de que haya paz y tranquilidad para poder seguir trabajando en Ciudad Juárez”. *El Universal de Ciudad Juárez*, 15 de mayo de 1983, IP.

de los empresarios locales, Alfonso Arronte Holguín, entonces presidente del Centro Empresarial y miembro de la CODIC, por su parte llegó a demandar la renuncia del presidente municipal debido a su incapacidad para imponer el orden en la ciudad.<sup>15</sup>

Sectores adicionales de la sociedad juarense que repudiaron las movilizaciones populares fueron la Barra y el Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados y el Colegio de Notarios, quienes también demandaron la intervención del ejército para que “de una vez por todas se frenen los actos vandálicos de los dirigentes y miembros del Comité de Defensa Popular”.<sup>16</sup> Del lado del CDP, por otra parte, también puede ser detectada la dura relación que mantenía con las organizaciones empresariales. Durante sus mítines, entre los temas discutidos se encontraban la carestía, sus dificultades para obtener la cesión de terrenos municipales, por la aparición y defensa de los secuestrados y desaparecidos políticos y, sobresaliendo entre ellas, consignas contra la Coalición para el Orden y el Desarrollo Integral de la Comunidad.<sup>17</sup>

### **b) La administración panista (1983-1985)**

A partir del 10 de octubre de 1983, la polaridad existente entre las organizaciones populares y los representantes de la burguesía local giró del CODIC y las cámaras empresariales hacia la presidencia municipal. Los organismos empresariales de inmediato se identificaron con la administración de Francisco Barrio y, al igual que hicieron con el presidente anterior, Reyes Estrada, también presionaron para “solucionar” el problema que entendían como anarquía. Sin embargo, pronto descubrieron que las presiones ya no eran necesarias.

15 Según la crónica que Arronte narró a la prensa, el desalojo de los estudiantes se debió a petición de la cúpula empresarial, incluyendo a la CANACO y CANACINTRA. “Al presentarse los dirigentes del sector empresarial ante al Alcalde, éste los exhortó a que tuvieran calma y esperaran a conocer las medidas que su gobierno adoptaría momentos después para poner freno a los desórdenes protagonizados por los estudiantes de la ESAHE. Efectivamente, fue entre las 17:30 y 17:40 horas cuando un gran número de policías uniformados y especiales se presentaron ante los estudiantes y a base de gases lacrimógenos y macana los desalojó de la 16 de Septiembre y del edificio de la SARH, liberando a todos los empleados y deteniendo a varios manifestantes. Después, dijo Arronte Holguín a los ahí presentes, fue así como desistieron (los empresarios) de su firme propósito de exigir en nombre de la comunidad al licenciado Reyes Estrada su renuncia como presidente municipal. En seguida informó que ellos personalmente se habían dado a la tarea de visitar a los diarios y declarar que otorgaban todo su apoyo al municipio por su actuación frente a los estudiantes” (*El Fronterizo*, 27 de mayo de 1983, págs. 1 a 9). Un elemento más que caracteriza el pensamiento político de Arronte Holguín, compartido por la cúpula empresarial juarense, se encuentra su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que según su interpretación fue inspirado en la constitución cubana (*Diario de Juárez*, 21 de junio de 1983, IP) y que, con él, el Ejecutivo, Miguel de la Madrid, se declaró en favor de la vía más corta al socialismo. *El Fronterizo*, 29 de junio de 1983, IP.

16 *Diario de Juárez*, 11 de diciembre de 1982, págs. 1 y 8.

17 *Diario de Juárez*, 14 de marzo de 1983, IP.

El sector empresarial encontró que la administración panista efectivamente representaba su concepción del orden social. Sobre todo porque el nuevo presidente municipal había pertenecido al mismo sector y organizaciones que tanto censuraron al CDP, a los maestros y a los estudiantes. Por su parte, las organizaciones populares comprendieron que el cambio de administración podía significar una política gubernamental más dura. Así, cuando oficialmente fue reconocido el triunfo electoral del ayuntamiento panista, el CDP se declaró “en plan de lucha”, reconociendo que sus añejos enemigos disponían ahora del poder político local y de la violencia legítima.<sup>18</sup>

En su toma de posesión, y como parte del discurso que a partir de ahí lo caracterizaría, Francisco Barrio proyectó los polos de su imagen política. “Sólo usaré la fuerza en casos extremos [...] gobernaré con amor, sobre todo hacia la gente más humilde”.<sup>19</sup> La extrema importancia que el nuevo ayuntamiento asignó a la ideología del orden y a la amenaza, social que representaban los movimientos populares independientes -según el pensamiento de la burguesía local- se tradujo en la creación de un cuerpo paramilitar especializado en intervenciones antisubversivas y antiterroristas: los Comandos de Alta Seguridad (COMAS). Evidentemente, una respuesta totalmente desproporcionada a las condiciones de la ciudad. En el contexto juarense, la supuesta amenaza a la estabilidad social únicamente la podían representar los colonos del CDP, los maestros de la CFDM y los estudiantes de la ESAHE; y contra ellos fue dirigida la sofisticada capacitación militar de los COMAS.

Apenas iniciado el nuevo periodo del gobierno municipal, los primeros en ser reprimidos violentamente fueron los estudiantes de la ESAHE. Mientras se encontraban frente a una escuela secundaria repartiendo propaganda en un autobús que habían solicitado “a préstamo”, la policía municipal los desalojó del lugar mediante golpes y gases lacrimógenos. Como era de esperar, las organizaciones empresariales felicitaron la medida, declarando su apoyo al presidente municipal y, de pasada, criticando a las administraciones anteriores por su excesiva tolerancia.<sup>20</sup> Por su lado, las organizaciones populares, a las que se incorporaron los

18 *Diario de Juárez*, 18 de agosto de 1983, págs. 1 y 4.

19 *El Norte*, 11 de octubre de 1983, IP.

20 “En entrevistas por separado, los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio, Artemio Jayme Salazar, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Antonio Ruiz Caballero, y del Centro Empresarial de Ciudad Juárez, licenciado Alfonso Arrome, coincidieron en que la postura del sector privado es de apoyar todas aquellas acciones que tome el sector gubernamental para impedir que grupos anárquicos pretendan imponer el desorden contra la estabilidad que tenemos en Ciudad Juárez en todos los niveles. Los representantes empresariales afirmaron sostener ese apoyo porque ya no es posible tolerar la pasividad de autoridad que hemos padecido en administraciones pasadas y que han propiciado que estos grupos anárquicos hayan cometido diversos actos antisociales en perjuicio de terceras personas y de toda la población en general”. *Diario de Juárez*, 19 de octubre de 1983, págs. 1 y 4.

partidos de izquierda, en protesta a la represión policíaca organizaron una gran marcha por la ciudad en repudio “al gobierno fascista de Francisco Barrio”.<sup>21</sup> Con las anteriores acciones, las principales posiciones quedaron definidas. Por lo menos hasta principios de 1985, el enemigo principal para la administración de Barrio fueron los movimientos de maestros, estudiantes y del CDP; y viceversa. Fue relegado a segundo orden todo conflicto con el partido oficial o el gobierno del estado. Por primera vez, la posición extrema que el sector empresarial había sostenido frente al movimiento popular tenía las condiciones para hacerse efectiva. Incluso dejaron de ser necesarias las presiones al ayuntamiento (no así los aplausos) para imponer el orden a los “grupos anárquicos”. A partir de entonces, la iniciativa represiva salía directamente del ayuntamiento que -sin exagerar- llegó a elaborarla tanto hasta conducirla a la esfera de la política internacional y de la confrontación este-oeste, involucrando al FBI y a la KGB soviética.

Decidida la administración panista a imponer el orden, determinó que todas las manifestaciones públicas deberían contar con autorización del municipio para poder realizarse.<sup>22</sup> Después del repudio —y apoyo— con que fue recibida la reglamentación de manifestaciones, los primeros en avisar (sin solicitar permiso) sobre sus acciones fueron los maestros de la CFDM. Como una medida de presión para obtener mejores salarios, los maestros anunciaron que bloquearían los puentes internacionales. De inmediato, la Canaco exigió la intervención de Barrio para evitarlo y, por su lado, sin necesidad de la recomendación, el presidente municipal sugirió públicamente a los visitantes de la ciudad de El Paso que se abstuvieran de cruzar a Ciudad Juárez durante el día del supuesto bloqueo.<sup>23</sup> De la misma manera, hizo a los maestros una clara advertencia: “el hecho es que un bloqueo de una vía de comunicación es un delito del fuero federal y nosotros no estamos aquí para solapar eso”.<sup>24</sup> El cierre de los puentes finalmente no se realizó, debido a que la amenaza fue suficiente presión para que los maestros entablaran negociaciones con la SEP y el gobierno del estado; pese a ello, la policía municipal fue movilizada para evitar cualquier sorpresa.

Algunas semanas después, las acciones de “ordenamiento” del ayuntamiento se dirigieron nuevamente contra los estudiantes de la ESAHE. En esa ocasión, ante el secuestro que éstos hicieron de algunos autobuses y la

21 *Diario de Juárez*, 20 de octubre de 1983, IP.

22 El secretario del ayuntamiento, Sergio Conde Varela, argumentó la medida “en virtud de que en las recientes manifestaciones realizadas por diversos grupos, tanto del sector magisterial, como estudiantil y del Comité de Defensa Popular, se han provocado serios problemas viales al bloquear calles, han realizado ‘pintas’ y han lanzado diatribas en perjuicio de terceros”. *Diario de Juárez*, 30 de noviembre de 1983, págs. 1 y 4.

23 “Es mejor eso y contar con visitantes muchos otros fines de semana, que exponerlos a situaciones que no se puede anticipar a qué puedan llegar”. *El Fronterizo*, 18 de enero de 1984, págs. 1 y 9.

24 *Loc. cit.*

supuesta posesión de armas y bombas molotov, la policía regular y la especializada del ayuntamiento, los COMAS, literalmente tomaron por asalto las instalaciones de la ESAHE. Nunca encontraron armas, pero sí golpearon a los estudiantes y recuperaron los camiones. Como cabe esperar, las organizaciones integrantes de la CODIC —incluyendo a las priístas— felicitaron a Barrio por su decidida intervención. Este a su vez declaró a la prensa que “va en serio lo de frenar la anarquía y el vandalismo, preservar el orden y la paz pública y someter a los infractores de la ley”.<sup>25</sup>

En aquellos momentos, la organización empresarial que más participó contra la ESAHE fue la CANACO. Su dirigente, Artemio Jayme Salazar, consideraba un compromiso personal su actitud contra el movimiento estudiantil.<sup>26</sup> En respuesta, los estudiantes organizaron una contra campaña dirigida a boicotear el turismo norteamericano. Mediante volantes invitaban a los turistas a no visitar Ciudad Juárez, para no ser víctimas de “la policía y de comerciantes ladrones”.<sup>27</sup> Las protestas de la CANACO de inmediato fueron atendidas por la presidencia municipal. El secretario del ayuntamiento anunció que “de ser necesario se incautarán los volantes mediante los cuales alumnos de la ESAHE iniciaron una campaña de desprestigio para nuestra población entre los turistas [...] y de ninguna manera esto debe ser interpretado como una violación al derecho constitucional de expresión”.<sup>28</sup>

Sobra decir que las demandas de maestros, estudiantes y colonos del CDP no fueron resueltas durante el periodo al que hacemos referencia, a pesar de las múltiples presiones y negociaciones que se realizaron; esto explica la persistencia de sus movimientos. Sin embargo, para el ayuntamiento panista su continuidad comenzó a ser comprendida como parte de un plan de desestabilización política. Según el secretario del ayuntamiento, “grupos comunistoides, trotskistas y socialistas, crean obstáculos y pretenden desestabilizar la administración de Francisco Barrio”, señalando como ejemplos las manifestaciones del CDP, de la ESAHE y de colonos.<sup>29</sup>

A partir de ese momento se produjo un giro que agudizó aún más la relación del ayuntamiento con el movimiento popular independiente. De la pretensión del orden por sí mismo, como principio moral y jurídico, el gobierno municipal pasó a la comprensión del “desorden” como una deliberada tendencia a generar una crisis política. Con esta lógica, el ayuntamiento radicalizó su actitud al sentir amenazada su sobrevivencia y el éxito de su administración. Sin alterar sus demandas y actividades, en la lógica del ayuntamiento el movimiento popular independiente se convirtió

25 *El Fronterizo*, 15 de marzo de 1984, págs. 1 y 4.

26 “Seguiré denunciando las acciones de grupos anárquicos”. *El Fronterizo*, 27 de marzo de 1984, pág. 7.

27 *El Universal de Ciudad Juárez*, 30 de marzo de 1984, págs. 1 y 4.

28 *Loc. cit.*

29 *Diario de Juárez*, 18 de abril de 1984, IP.

en portador de un plan de desestabilización política, en el sentido ultra-derechista del término. Con esta nueva perspectiva, los participantes a las movilizaciones callejeras corrieron mayores riesgos de ser reprimidos con dureza, como ocurrió con los maestros.

Durante el mes de mayo de 1984, los maestros de la CFDM reanudaron sus protestas mediante paros laborales. Desde la CODIC e individualmente, la CANACO se distinguió en censurar las demandas salariales del magisterio.<sup>30</sup> No obstante, el movimiento de la CFDM volvió a convocar a un paro laboral y a un mitin, que además de realizarse frente a la delegación de la SEP también se desarrolló frente a las oficinas de la CANACO.<sup>31</sup> Días después, protestando por un incremento salarial que calificaron de ridículo, la CFDM convocó a una nueva manifestación que incluiría el bloqueo de un importante cruce vial que comunica a las principales zonas de la industria maquiladora.

Al enterarse del bloqueo, el sector empresarial demandó abiertamente la represión de la manifestación.<sup>32</sup> Por su parte, Francisco Barrio también lanzó una dura advertencia, que muestra su concepción del poder gubernamental. “La fuerza pública del municipio tiene facultades para actuar en cuanta situación conflictiva se presente. Esta fuerza pública se creó para usarse, porque de lo contrario se atrofia, como ocurrió en administraciones anteriores, en que habiendo necesidad urgente de que actuara no lo hizo”.<sup>33</sup> Y efectivamente, la acción más violenta de la policía municipal y de los COMAS ocurrió durante el desalojo de los maestros, que cumplieron con el bloqueo anunciado.

El apoyo empresarial a la medida fue entusiasta, mostrando en esa ocasión que también estaban preocupados por la desestabilización política

30 “Los maestros son una clase privilegiada en el país, por los altos sueldos que reciben, los muchos beneficios sociales que se les otorgan y las pocas horas que trabajan en el año”. *El Fronterizo*, 18 de mayo de 1984, IP.

31 *Diario de Juárez*, 22 de mayo de 1984, IP.

32 El presidente de CANACINTRA, Antonio Ruiz Caballero, declaró que “los bloqueos, las manifestaciones que lesionan intereses de terceros y demás actos que van en contra de la buena imagen de Ciudad Juárez han motivado a los dirigentes empresariales a requerir con más fuerza la intervención del sector gubernamental, porque no es posible aceptar que esta región se convierta en tierra de nadie. Aquí debe imperar el orden y la tranquilidad”. *Diario de Juárez*, 7 de junio de 1984, pág. 3

33 *Diario de Juárez*, 8 de junio de 1984, págs. 1 y 4.

que se encontraba detrás de las movilizaciones de los maestros, según la interpretación de la presidencia municipal.<sup>34</sup> Por su parte, Barrio aprovechó la ocasión para ratificar su posición inflexible: “No nos intimidarán las amenazas, ni las declaraciones de nadie; estamos para gobernar y darle a la comunidad un clima de tranquilidad y paz social, y ésta se garantizará a como de lugar”.<sup>35</sup>

A estas alturas, “la conjura” comunista se había convertido en una obsesión de la presidencia municipal, supuestamente destinada a propiciar su caída. Pero además, pareciera que en ella estaba implicada la estabilidad política nacional. Sin explicar cómo la presidencia municipal llegó a la conclusión de que los movimientos populares en Ciudad Juárez eran la cabeza de playa del comunismo internacional en México. Según Barrio, el CDP y los otros movimientos tenían conexiones con la KGB y Moscú, siguiendo los dictados de un plan internacional que conduciría al país a la anarquía.<sup>36</sup> En estos términos, el problema excedía los intereses de la sociedad local y afectaba a la seguridad nacional, pasando además a formar parte de los conflictos internacionales; y así fue expuesto a la opinión pública. De representar primero un problema de orden y legalidad, pasando después a ser parte de un plan de desestabilización contra el gobierno municipal, en un tercer momento los movimientos populares en Ciudad Juárez se convirtieron en un riesgo para México y la cultura occidental.

34 Entre las declaraciones más representativas encontramos las siguientes. CANACO (Artemio Jayme Salazar): “En Ciudad Juárez estuvimos padeciendo durante muchos años de ausencia de autoridad y esto originó consecuencias de tipo anárquico que aún estamos viviendo, pero que desde luego la actual administración municipal se ha propuesto poner fin dentro de la legalidad [...] es inaceptable por las repercusiones en contra de la comunidad que tales manifestaciones se hagan con fines más que de conseguir los objetivos del movimiento, la inestabilidad social, porque no es convincente que el derecho a manifestarse se traduzca en un daño a terceros”. Por su parte, el Centro Empresarial (José I. Ortega): “Seguramente la intervención de la policía para evitar el bloqueo del cruce comercial será utilizado por los grupos anárquicos para pedir la caída del actual gobierno municipal, sin embargo creo que es inaceptable ir en contra de una autoridad que cumple con la obligación de velar por los intereses de la comunidad. En Ciudad Juárez debe imperar el orden porque ya estamos cansados que cualquier líder o grupo tome las calles y mediante bloqueos y manifestaciones por uno u otro pretexto provoquen el desquiciamiento de la vialidad”. En cuanto a la CANA-CINTRA (Antonio Ruiz Caballero): “mientras la autoridad imponga el orden dentro de los cauces legales, las instituciones de la iniciativa privada apoyarán las medidas que tome el sector gubernamental ya que resulta imposible seguir aguantando las consecuencias de las manifestaciones fuera del marco legal y del entendimiento”. *Diario de Juárez*, 9 de junio de 1984, págs. 1 y 11.

35 *Diario de Juárez*, 9 de junio de 1984, págs. 1 y 4. Y no sólo eso, la violencia de la policía municipal, en la interpretación del secretario del ayuntamiento, había sido causada por los propios maestros. El enfrentamiento “pudo haber sido propiciado por los grupos de tendencia política de izquierda que han desarrollado una campaña para tratar de desestabilizar la actual administración municipal [...] La estrategia que utilizaron los maestros es similar a la que usan los grupos trostkistas; la técnica de pinzas que consiste en provocar un enfrentamiento y posteriormente atacar a las autoridades acusándolas de represivas”. *El Fronterizo*, 9 de junio de 1984, págs. 1 y 8.

Por coincidencia (o por invención), al mismo tiempo que se hacían las revelaciones anteriores una empresa juarense reportó la pérdida de un cartucho de dinamita. Se temió lo peor: la conjura internacional preparaba un atentado contra la vida de Francisco Barrio. El director de la policía municipal, Héctor Mejía Gutiérrez, hizo pública su preocupación: “no podemos afirmar que quienes planean el atentado sean del CDP, pero sí hemos detectado que algunas de esas personas han tenido contacto con la guerrilla. Cinco activistas pertenecientes a grupos anárquicos de Ciudad Juárez son vigilados. Aún no se capturan, pues se pretende detectar a todas las personas implicadas en el intento dinamitero”.<sup>37</sup> Al parecer, fue el FBI quien descubrió la compleja intriga de los grupos anárquicos juarenses y su combinación con el comunismo internacional. En vanas ocasiones se anunciaron entrevistas de la policía municipal con el FBI, en las que se informó sobre los detalles del atentado; por lo demás, la idea de hacerlo público provino de los segundos. Según esta versión, habían sido extremistas de Puerto Rico quienes estuvieron en contacto telefónico con anarquistas locales.<sup>38</sup>

Independientemente de que la historia del atentado haya sido verdadera, el hecho es que generó una gran inquietud entre la población que repercutió en dos resultados principales. El primero, la creación de una imagen muy negativa del movimiento popular independiente. Particularmente resultó muy dañada la imagen pública del CDP, que había sido la organización con más larga trayectoria. En contraparte, la imagen de Francisco Barrio conquistó definitivamente una posición indisputada de caudillo regional. Contrario a lo que pudiera pensarse, ni el liderazgo de Barrio, ni la enorme fuerza *organizada* del panismo juarense surgieron en las elecciones de 1983; en gran proporción fueron resultado del enfrentamiento del ayuntamiento con el movimiento popular independiente.

Realizado con gran publicidad, el cierre apoteótico del caso del atentado fue la convocatoria que hizo la presidencia municipal a una concentración pública en apoyo a Barrio y en repudio a los grupos anárquicos y comunistas. Durante el mitin, efectuado el 20 de junio de 1984, se repartieron volantes con textos especialmente dedicados al CDP: “hoy el pueblo de Juárez les arranca la careta de redentores sociales y los exhibe como lo que verdaderamente son: títeres al servicio del comunismo internacional”. Calculada la asistencia entre 7 y 10 mil personas, fue la mayor concentración que hasta entonces hubieran organizado Francisco Barrio y el PAN, y la primera de una exitosa serie que seguiría hasta 1986. Con este escenario y prácticamente en condiciones de héroe, Barrio aceptó afrontar como martirio personal en bien de la comunidad los riesgos que representaban los grupos anarquistas: “En mi alma no hay ningún rincón para el miedo, ni al más radical anarquista, ni al más desalmado terrorista.

37 *Diario de Juárez*, 17 de junio de 1984, IP.

38 *Diario de Juárez*, 16 de julio de 1984, IP.

Voy a morir cuando Dios quiera y sólo espero estar en paz conmigo mismo y con él”. En esa ocasión también prometió que seguiría combatiendo los actos anárquicos que promueven “unos hijos bastardos con la intención de provocar un suicidio colectivo enfrentando a la misma comunidad”.<sup>39</sup>

En la nueva capacidad de convocatoria adquirida por el PAN (Barrio) destacan por lo menos dos aspectos: que se trató de un elaborado proceso de construcción *durante* la administración panista y que, por lo mismo, transformó la relación precedente entre el PAN y los votantes que había captado durante las elecciones de 1983. Hasta entonces, la relación del PAN con la población juarensé se había establecido a través del eje “no PRI”, que si bien era amplio, todavía mantenía características difusas. Por el contrario, siguiendo distintos procedimientos -destacando el uso intenso de medios de comunicación- y a través de la relación represiva hacia el movimiento popular independiente -que fue presentado como la principal amenaza del ayuntamiento panista—, la relación difusa se convirtió en una relación orgánica, activa, mucho más estructurada. La medida en que esa articulación se desarrolló podemos observarla en las amplias concentraciones de masas que alcanzaron su clímax durante el conflicto electoral de 1986.

Con la nueva posición de fuerza adquirida después del mitin anticomunista, las acciones represivas de la administración municipal no reconocieron límites, ni siquiera los internacionales entre México y Estados Unidos. Apenas 10 días después tuvo lugar otra de las espectaculares acciones de la policía municipal, durante el desalojo de uno de los puentes internacionales de la ciudad.<sup>40</sup>

La campaña de la administración municipal contra el CDP se reinició en septiembre de ese año. Nuevamente, gracias a sus contactos en Estados Unidos -y tal vez, en otras partes del mundo- los servicios de espionaje de la presidencia municipal descubrieron que el CDP estaba preparando una “escalada de violencia” para el día 9 de septiembre, con el auxilio de terroristas internacionales. Sin embargo, como informó después el secretario del ayuntamiento, la denuncia pública de sus pretensiones abortó la tentativa extremista<sup>41</sup>. En esa ocasión y durante las semanas

39 *El Fronterizo*, 21 de junio de 1984, págs. 1 y 11.

40 En protesta por las reformas a la legislación sobre migración en Estados Unidos, organizaciones de chicanos y mexicanos realizaron mítines simultáneos en Ciudad Juárez y El Paso, que como acto final tendrían el encuentro de los asistentes en la línea internacional para simbolizar su solidaridad. Entre las organizaciones representadas se encontraban la Asociación de Estudiantes Chicanos y Mexicanos (MECHA), la Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos (UTAF), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el CDP, la CFDM, el Comité de Defensa de Perseguidos, Presos Políticos y Exiliados, y los partidos PSUM y PRT. En momento de su encuentro final en la línea fronteriza, la policía municipal y los COMAS desalojaron a los participantes mediante golpes y gases lacrimógenos, cruzando además al lado norteamericano, persiguiendo a los “infractores” del orden. *El Fronterizo*, 3 de julio de 1984, págs. 1 y 10.

41 *Diario de Juárez*, 13 de septiembre de 1984, IP.

siguientes, el mismo funcionario se encargó de propagar que el CDP estaba adquiriendo armas robadas en Estados Unidos, con las que planeaba actividades terroristas. Tan fuerte fue la difusión de esta idea que se convirtió en tema central en los medios de difusión. De inmediato, el PAN y las cámaras empresariales solicitaron formalmente al ejército que se catearan los domicilios de las colonias del CDP.<sup>42</sup> Si bien nunca aparecieron indicios de armas, la campaña del municipio contra el CDP tuvo por efecto aumentar el desprestigio de la organización entre la comunidad.

La última gran acción represiva del ayuntamiento panista la recibieron los estudiantes de la ESAHE. De nuevo con el argumento de los autobuses secuestrados, la policía municipal y los COMAS se enfrentaron a ellos. Fueron detenidos 82 estudiantes bajo los cargos de asociación delictuosa, portación de armas prohibidas (la prensa lista objetos como piedras, varillas y bombas molotov) y lesiones. Pero no hubo cargos sobre el secuestro de autobuses, que fue el argumento que llevó a la policía municipal a su encuentro.<sup>43</sup>

### c) El regreso del conflicto electoral

La proximidad del calendario electoral alteró el orden de prioridades del ayuntamiento panista. Paulatinamente giró el interés del movimiento popular hacia el nuevo encuentro electoral con el PRI. Sin hacerse notar, la política internacional, el conflicto Este-Oeste, el terrorismo, los anarquistas, la lucha entre la KGB y el FBI, los atentados a la vida de Barrio, el comunismo internacional y sus títeres locales, etc., todo desapareció definitiva e inesperadamente, lo cual sorprende si consideramos la trascendencia de esos problemas para el municipio panista. Por decirlo de esta manera, con la proximidad de las elecciones federales de 1985 el comunismo internacional perdió interés en desestabilizar al gobierno de Francisco Barrio.

Por otra parte, debe considerarse que las acciones represivas del municipio efectivamente tuvieron efectos sobre el movimiento popular, provocando que bajara su intensidad. Por lo menos, la CFDM resintió en su cohesión interna los golpes de la policía y de los COMAS. El movimiento de los estudiantes, por su lado, si bien sufrió desgaste por las acciones

42 La certeza sobre la existencia de armas llegó al extremo de saber exactamente cómo y hacia dónde las trasladaba el CDP. Asumiendo tener la información completa, la presidencia municipal convenció a la policía judicial federal de participar en un operativo conjunto, interceptando un autobús en donde suponía se trasladaban droga y armas. Con el más fino estilo de película policíaca se realizó el operativo en la carretera a la ciudad de Chihuahua, pero obteniendo frustrantes resultados. *Diario de Juárez*, 29 de septiembre de 1984, IP.

43 *El Fronterizo*, 10 de noviembre de 1984, IP.

represivas, fueron más eficientes para debilitarlo las concesiones parciales que obtuvieron y la prolongación de su conflicto. En cuanto al CDP, fue la única organización que se conservó estable y que a la fecha mantiene su arraigo regional, a pesar de los cambios internos y de estrategia que ha experimentado. No obstante, no ha logrado corregir la imagen negativa que tiene entre la población, lo que ha repercutido en su relativo aislamiento.<sup>44</sup>

Como puede apreciarse en lo expuesto, lo que reprimía el ayuntamiento panista no eran las demandas del movimiento popular, que incluso calificó en algún momento de legítimas.<sup>45</sup> Su problema eran las formas, por lo que significaban como ruptura del orden establecido, de la legalidad y, finalmente, de su autoridad. El PAN tradujo la ruptura de la legalidad como un desafío a su autoridad, es decir, como un cuestionamiento de su gobierno. Con su actitud represiva, puede entenderse que el ayuntamiento panista sentía la necesidad de demostrar que *gobernaba*, que se respetaba en toda la línea su autoridad. En contraste, para los gobiernos del PRI la ruptura de la legalidad no existe como problema: es parte existencial de la política corporativa y clientelista. En la perspectiva de la burocracia política, la ilegalidad no tiene que ver con la autoridad, ni con el gobierno ni con el poder político. Por el contrario, en las condiciones de ascenso del PAN al gobierno municipal, obligado a mantener relaciones con los gobiernos estatal y federal, la autoridad, la legalidad y el poder político dependían uno de otro.

Pero más allá de esta cuestión, sin duda importante para explicar el conflicto, el grupo dirigente del PAN juarense tenía rasgos ideológicos que objetivamente lo enfrentaban al movimiento popular independiente. La dirección panista pertenecía al mismo sector social que con anterioridad había demandado acciones represivas en contra de las organizaciones independientes. Si además consideramos que en ese momento la burguesía nacional y local se encontraban sensibles a la experiencia “traumática” de la nacionalización bancaria,<sup>46</sup> el mantenimiento del orden y del *status quo* se convirtieron en la prioridad política. Fue así inevitable que definieran a las tendencias contrarias al orden como sus enemigos irreconciliables. Sobre todo después del “caos” que la nacionalización bancaria había

44 La actual imagen negativa del CDP no fue producto exclusivo del ayuntamiento panista. En menor proporción influyeron también las estrategias de la organización posteriores a 1985, criticadas por partidos como el PMS y el PRT, debido a su alianza con PRI y con los gobiernos federal y estatal en su lucha contra el panismo en el estado.

45 “Independientemente de que las aspiraciones de los grupos estudiantiles y maestros democráticos en la entidad son lícitas, son censurables los procedimientos que usan para llegar a sus objetivos”. Jesús Hernández, secretario del Partido Acción Nacional en Ciudad Juárez. *Diario de Juárez*, 17 de noviembre de 1982, págs. 1 y 6.

46 “Lo sucedido en el fatídico 1982 fue algo demasiado grave y produjo tal traumatismo en todo el país que desaparecerlo no será cosa fácil y no se hará con palabras, sino con hechos”. José María Basagoiti, presidente de la COPARMEX, durante el cambio de dirección del Centro Empresarial de Ciudad Juárez. *El Fronterizo*, 3 de marzo de 1983, págs. 1 y 10.

provocado al país, el panismo y sus dirigentes se sintieron obligados a demostrar e imponer lo contrario.

La lógica del orden, a fin de cuentas, había sido central para motivar la participación empresarial dentro del PAN, si se considera que en su razonamiento el PRI y el gobierno no sólo no lo garantizaban, sino que estimulaban el desorden, como lo demostró la nacionalización bancaria. En esta secuencia destaca que la idea misma de orden evolucionó entre 1982 y 1983. Primero dominaba el *orden normativo*, que era el violado originalmente por el movimiento popular independiente. Después amplió su contenido al *orden social*, que se visualizó amenazado por el gobierno federal y sus pretensiones socialistas, según su interpretación. Entre las consecuencias de la perspectiva ampliada estuvieron tanto la extrema intolerancia hacia el movimiento popular independiente, como el proyecto político de largo plazo al que aspiraba el neopanismo juarense.

La administración de Francisco Barrio encarnó la ideología del orden que la burguesía local había definido como su prioridad política. En el horizonte inmediato, la defensa de la legalidad, el respeto a la propiedad privada y la defensa de los intereses de terceras personas, fueron los argumentos para reprimir al movimiento popular independiente. Nadie se encontraba por encima de esos principios; por lo menos así lo señalaba desde el gobierno local. Poco tiempo después, en las elecciones de 1986, el panismo juarense llamaba la atención nacional e internacional con sus medidas de “desobediencia civil”, idénticas y más extremas que las protestas del movimiento popular independiente. El final de la administración municipal coincidió con las elecciones del ejecutivo estatal, y Barrio ya había hecho los méritos suficientes para obtener la candidatura para gobernador por el PAN. Como ha sido extensamente indicado en múltiples lugares, sobre los resultados oficiales de esa elección se proyectaron grandes dudas. El PAN y su candidato argumentaron que el fraude electoral había determinado el triunfo del candidato oficial, Fernando Baeza, y no la decisión de los electores; y no carecían de argumentos.

Antes, durante y posteriormente a las elecciones de 1986, el PAN chihuahuense implementó una serie de medidas en contra de las acciones del aparato gubernamental destinadas a facilitar por todos los medios el triunfo del PRI. Fue entonces implementada la “desobediencia civil” como programa de protesta diseñado por el PAN. El PAN chihuahuense, dirigido por Francisco Barrio, contrariando toda su argumentación precedente sobre el respeto al orden y a la legalidad, no tuvo empacho en bloquear calles, ocupar oficinas públicas, cerrar los puentes internacionales de Ciudad Juárez, cerrar carreteras, insultar a la autoridad, etc. Los argumentos

utilizados por el PAN en contra de los “anarquistas” de meses antes, podrían haberse aplicado sin mayores trámites contra sí mismos.<sup>47</sup>

En un esfuerzo por mantener la coherencia, el programa de “desobediencia civil”, convertido después en “resistencia civil”, previamente había desconocido la legitimidad de los gobiernos estatal y federal, lo que permitía, siguiendo su argumentación, los actos de protesta. Más sólido todavía, apelaba a los derechos humanos y a los ciudadanos establecidos constitucionalmente. Aún dentro de esa justificación, el mantenimiento de la legitimidad hacia el gobierno municipal panista, que todavía existía en 1986, supondría que la desobediencia civil no se aplicara en Ciudad Juárez. Por el contrario, la ciudad fronteriza fue el escenario de las acciones más radicales, como el bloqueo total y prolongado de los puentes internacionales, sin que la policía municipal y el cuerpo paramilitar de los COMAS hicieran algo por impedirlo, como tampoco lo hizo el gobierno federal, a pesar de que en varias ocasiones movilizó al ejército.<sup>48</sup>

### *Nota Final*

La experiencia del gobierno de Francisco Barrio en Ciudad Juárez, de la cual sólo hemos revisado un eje de su ideología política, muestra rasgos centrales de quienes fueron actores principales en la política nacional después de 1982. Se trata de la primera y más radical generación proce-

47 “La vida en sociedad se rige por leyes y reglamentos cuya aplicación no es de ninguna manera coartar la libertad. Esas leyes se establecen para la convivencia pacífica de autoridad a personas y viceversa, así como de los ciudadanos mismos. Cuando un grupo no quiere sujetarse a ellas, está en rebeldía contra la sociedad por lo que no hay obediencia y por tanto lo mejor sería que se retirara al campo o lugares aislados donde puede llevar a efecto sus depredaciones entre miembros dispuestos a vivir en esas condiciones. Yo respaldaré toda actitud enérgica de la autoridad para que esas personas se conduzcan dentro del orden”. Declaración de Ricardo Montoya Martínez, regidor del ayuntamiento por el PAN. *El Fronterizo*, 20 de marzo de 1982, págs. 1 y 4.

48 A propósito del asunto de los puentes, conviene recordar un comunicado de prensa del presidente municipal, Francisco Barrio, emitido en 1984: “Con relación al anunciado bloqueo de los puentes internacionales en señal de protesta por problemas magisteriales, la presidencia municipal desea puntualizar lo siguiente: 1) Los problemas magisteriales, al igual que otros problemas sociales que afectan a nuestra ciudad, no son brotes recientes y aislados, son conflictos que se gestaron hace mucho tiempo y que han cobrado fuerza por la negligencia de organismos gubernamentales, entre ellos las autoridades educativas. 2) Aun cuando los puentes internacionales en su parte ubicada en territorio mexicano son de jurisdicción federal, la administración municipal está conciente de su deber de salvaguardar el orden y la paz pública en nuestra comunidad. 3) Las previsiones que este caso requiere ya se están tomando y en todo caso las medidas que se pongan en práctica serán para garantizar los intereses de los juarenses, de ninguna manera con la finalidad expresa de atropellar el derecho de asociación, manifestación y expresión de las ideas, que tenemos todos los mexicanos. 4) Por lo que respecta a la actuación pública de grupos anárquicos, esta administración ha tratado por medios pacíficos de utilizar el diálogo como medida conciliatoria, pero al parecer hay intereses contrarios que constantemente ponen en peligro la paz social. Ante tal situación, si en el futuro se llega a usar la fuerza pública a nivel municipal, será obligados por la intransigencia de elementos nocivos ajenos a nuestro control y enemigos no de la administración municipal actual, sino de la sociedad en general”. *El Fronterizo*, 18 de enero de 1984, págs. 1 y 9.

cedente del sector empresarial, que decidió participar en los procesos electorales de manera independiente y en abierta confrontación con la burocracia política y su partido. El vehículo de su participación fue el PAN, partido del que adquirieron completo control en algunos lugares -como en Ciudad Juárez—, dando origen a lo que en términos genéricos se conoce como la corriente neopanista.

De entonces a la fecha, sobre todo ha cambiado la posición del gobierno federal ante la estructura económica y, dentro de ella, con el capital nacional e internacional. En el terreno político, la apertura y conciliación gubernamentales han llegado al nivel de invitar expresamente a los empresarios a participar dentro del PRI.<sup>49</sup> Con esta identidad de intereses entre el Estado y la iniciativa privada, ya no existen más las condiciones que permitirían la eventual reproducción del neopanismo, mucho menos en su forma original y extrema, como fue el caso de Ciudad Juárez.

En su relación conflictiva con el sistema político, la corriente neopanista y la sociedad urbana -dominada ideológicamente por la clase media- con la crisis económica y la nacionalización bancaria encontraron una coyuntura de identificación, permitiendo con su encuentro acontecimientos como el chihuahuense entre 1983 y 1986. Las mayores ciudades de la entidad se opusieron con fuerza y de manera simultánea al PRI, coincidiendo en todos los casos (con excepción de Ciudad Cuauhtémoc) en su apoyo a un PAN reforzado con los recursos y miembros del sector empresarial. Pero ninguna de las versiones locales del neopanismo tuvo una conexión tan estrecha con la población como en el caso juarense. Y no se trató de un encuentro espontáneo, porque tuvo la complejidad del tránsito de una relación difusa hacia una relación orgánica, de fuertes rasgos caudillistas. La paradoja de la gran capacidad de movilización del neopanismo en Ciudad Juárez fue que se construyó -en gran medida- no en conflicto con el PRI, sino en contra del movimiento popular independiente. No por esa razón el neopanismo juarense dejó de ser portador de los intereses democráticos de la sociedad, sobre todo durante el conflicto electoral de 1986. Ni por esa razón se justifican la manipulación de los resultados electorales, ni toda la fuerza del aparato estatal empleada entonces para controlarlo. Como movimiento social, el neopanismo juarense mostró una gran capacidad para portar los intereses democráticos de la sociedad; pero también de lo contrario, como poder público.

49 Al menos es una de las propuestas que se discutirán en su próxima asamblea nacional. *La Jornada*, 20 de agosto de 1990, pág. 1.

## BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar Camín, Héctor**, “El canto del futuro”, *Nexos*, 1986, núm. 100, págs. 15-29.
- , “La transición mexicana”, *Nexos*, 1988, núm. 124, págs. 21-27.
- Aziz, Alberto**, “Chihuahua y los límites de la democracia electoral”, *Revista Mexicana de Sociología*, v. XLIX, n. 4, 1987, pp. 159-226.
- De la Peña, Guillermo**, “Poder local, poder regional: perspectivas socio-antropológicas”, en *Poder local, poder regional*. Jorge Padua y Alain Vanneph (comps.). México, El Colegio de México-CEMCA, 1986, págs. 27-56.
- Garrido, Luis Javier**, “Un partido sin militantes”, en *La vida política mexicana en la crisis*. Soledad Loaeza y Rafael Segovia (comps.). México, El Colegio de México, 1987, págs. 61-76.
- González Casanova, Pablo**, “Democracia en tiempos de crisis”, en *Las elecciones en México. Evolución y perspectivas*. Pablo González Casanova (coord.). México, Siglo XXI-IISUNAM, 1985, págs. 11-28.
- Guillén **López, Tonatiuh**, “Crisis económica y cambio político en México. Una visión desde la frontera norte”. *Estudios Sociológicos* n. 16, 1988, págs. 103-127.
- , “The Social Bases of the PRI”. Wayne A. Cornelius, Judith Gentleman and Peter Smith (eds.), *Mexico’s Alternative Political Futures*. La Jolla, Ca., Center for US-Mexican Studies, UCSD, 1989.
- , “Political Parties and Political Attitudes in Chihuahua”, en Arturo Alvarado (ed.), *Electoral Patterns and Perspectives in Mexico*, La Jolla, Ca., Center for US-Mexican Studies, UCSD, 1987.
- Krauze, Enrique**, *Por una democracia sin adjetivos*. México, Joaquín Mortiz Planeta, 1986.
- Loaeza, Soledad**. *Clases medias y política en México*. México, El Colegio de México, 1988.
- , “El Partido Acción Nacional: de la oposición leal a la impaciencia electoral”, en Soledad Loaeza y Rafael Segovia (comps.), *La vida política mexicana en la crisis*. México, El Colegio de México, 1987, pp. 77-105.
- , “Desigualdad y democracia”, *Nexos*, 1988, núm. 123, pp. 33-38.
- López Monjardín, Adriana**, *La lucha por los ayuntamientos: una utopía viable*. México, Siglo XXI-IISUNAM, 1986.
- Martínez Assad, Carlos** (coord.). *Municipios en conflicto*. México, G.V. Editores-IISUNAM, 1985.
- Meyenberg, Yolanda, J. Peschard, et. al.** *Política y partidos en las elecciones federales de 1985*. México, UNAM-FCPS, 1987.
- Meyer, Lorenzo**, “La democracia política: esperando a Godot”, *Nexos*, 1986, núm. 100, pp. 39-46.

**Molinar Horcasitas, Juan**, "The 1985 Federal Elections in Mexico: The Product of a System", en Arturo Alvarado (ed.), *Electoral Patterns and Perspectives in Mexico*. La Jolla, Center for U.S.- Mexican Studies, UCSD, 1987, págs. 17-32.

Nuncio, **Abraham**. *El PAN. Alternativa de poder o instrumento de la oligarquía empresarial*. México, Nueva Imagen, 1986.

**Ramírez Saiz, Juan Manuel**. *El movimiento urbano popular en México*. México, Siglo XXI, 1986.

**Tarrés, María Luisa**, "Del abstencionismo electoral a la oposición política. Las clases medias en Ciudad Satélite". *Estudios Sociológicos*, núm. 12, 1986, págs. 361-389.